



Revista Austral de Ciencias Sociales
ISSN: 0717-3202
ISSN: 0718-1795
revistaustral@uach.cl
Universidad Austral de Chile
Chile

Macías Vázquez, Alfredo; Morillas del Moral, José Antonio
La gestión del capital simbólico y el desarrollo rural: análisis comparativo de experiencias europeas y latinoamericanas *
Revista Austral de Ciencias Sociales, núm. 42, 2022, pp. 275-290
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

DOI: <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2022.n42-15>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45972422015>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

ALFREDO MACÍAS VÁZQUEZ**
JOSÉ ANTONIO MORILLAS DEL MORAL ***

La gestión del capital simbólico y el desarrollo rural: análisis comparativo de experiencias europeas y latinoamericanas*

The Management of Symbolic Capital and Rural Development: Comparative Analysis of European and Latin American Experiences

* Esta investigación ha recibido fondos del proyecto: La construcción social de la calidad alimentaria: Mediaciones entre la producción y el consumo en una economía basada en el conocimiento (CSO2017-85188-R) financiado Ministerio de Economía y Competitividad de España.

** Alfredo Macías Vázquez. Universidad de León. Departamento de Economía y Estadística. Campus de Vegazana s/n. León, España. amacv@unileon.es ORCID: 0000-0002-2684-2666

*** José Antonio Morillas del Moral. Universidad de León y Universidad de Granada. Departamento de Economía y Estadística. Campus de Vegazana s/n. León, España. jmorm@unileon.es ORCID: 0000-0002-6878-2470

Resumen

En una economía posindustrial, deben repensarse las estrategias de desarrollo rural. Actualmente, se están cuestionando los viejos paradigmas de desarrollo y estableciéndose nuevas mediaciones entre el campo y la ciudad, que obligan a un análisis multidisciplinar de los procesos emergentes. A partir del análisis comparativo de una serie de estudios de caso en los que hemos trabajado en los últimos años en Europa y América, lo que pretendemos es subrayar la relevancia de los nuevos esquemas de gobernanza de los recursos simbólicos en la configuración de las cadenas de valor agroalimentarias y sus efectos en la sostenibilidad ambiental de la explotación de los recursos materiales. Para ello, partimos de un replanteamiento de los dilemas sociales relacionados con la gobernanza de los bienes comunes y de los procesos de desposesión que sufren las comunidades rurales en una economía posindustrial. Concluimos que si dichas comunidades no asumen la importancia que tiene la gestión de estos recursos simbólicos, la necesidad de mantener los niveles de renta llevará a un proceso de sobreexplotación de los recursos materiales y de degradación ambiental.

Palabras clave: desarrollo, capital simbólico, gobernanza, bienes comunes, valor.

Abstract

In a post-industrial economy, rural development strategies must be reconsidered. Currently, the old development paradigms are subjected to question and new mediations are being established between the countryside and the city, which require a multidisciplinary analysis of emerging processes. Based on the comparative analysis of a series of case studies in which we have worked in recent years in Europe and Latin America, what we intend in this article is to underline the relevance of the new governance schemes of symbolic resources in the configuration of the agri-food value chains and their effects on the environmental sustainability of the exploitation of material resources. To do this, we start from a rethinking of the social dilemmas related to the governance of common goods and the processes of dispossession suffered by rural communities in a post-industrial economy. We conclude that if these communities do not assume the importance of managing these symbolic resources, the need to maintain income levels will lead to a process of overexploitation of material resources and environmental degradation.

Key words: Development, Symbolic Capital, Governance, Commons, Value.

1. Introducción

Con el desarrollo de una economía basada en el conocimiento se hace necesario identificar, explorar y analizar nuevas formas de innovación social rural que permitan generar sinergias positivas en la cadena de valor y alternativas para construir socialmente la calidad y la identidad territorial de los alimentos, incorporando en el

análisis una interacción más compleja entre las dimensiones materiales e inmateriales de los procesos de valorización a escala territorial (Macías Vázquez y Saavedra Gallo 2021; Belletti, Marescotti y Brazzini 2017). Nuestro objetivo es interrogarnos sobre los determinantes de este proceso, en qué medida un modelo de calidad alimentaria se ve condicionado por las nuevas formas de generación de valor asociadas con el desarrollo de la economía postindustrial, qué nuevos valores, significados y atributos se vinculan con la calidad de los alimentos en una economía basada en el conocimiento y, por último, cuáles son las mediaciones cognitivas que están surgiendo entre la producción y el consumo, qué actores las ponen en marcha y cómo. Dar respuesta a estas preguntas implicaría ubicar el debate sobre la construcción de la calidad alimentaria en un plano completamente diferente, contribuyendo a un rediseño de las políticas públicas que fomentan el desarrollo rural. En Europa y particularmente en España, el problema fundamental es que los productores rurales han accedido al mercado mediatizados por un componente abstracto y socialmente construido (las certificaciones territoriales de calidad), que implicaba una determinada lógica para lograr un determinado estatus, una determinada notoriedad, de los alimentos de calidad y, de esta manera, aumentar su precio. A pesar de la enorme contribución del sistema a un posicionamiento ventajoso de productores locales en la cadena de valor y a un desarrollo rural sustentable y más inclusivo, los cambios producidos durante los últimos años están cuestionando su función institucional como mecanismo de protección del productor local. Este cuestionamiento se viene detectando tanto en la literatura académica (Teil 2017; Marie-Vivien et al. 2017; Grunert y Aachmann 2016) como entre los propios actores y organismos

internacionales, como la Unión Europea (Lucatelli 2000). Lo que hemos intentado en este trabajo es precisamente cuestionar estos enfoques y plantear que, con el desarrollo de economías postindustriales, se abren nuevas oportunidades de mediación entre el mundo de la producción y el consumo, siempre y cuando se comprenda cabalmente su lógica de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el trabajo muestra cómo la construcción social de la calidad alimentaria emerge como un conjunto de realidades simbólicas con consecuencias materiales, generado en un ámbito de discursos y prácticas interdependientes alrededor del mundo de la producción y del consumo, de las conexiones entre ambos en una economía postindustrial. El análisis comparativo de los estudios de caso indica, a su vez, que es necesario repensar la noción de acción colectiva en una economía basada en el conocimiento. Dejando atrás las nociones basadas en criterios de elección racional, se hace necesario vincular el fenómeno de la acción colectiva con los reiterados procesos de resignificación de la producción y el consumo en una economía cognitiva, poniendo de relieve la importancia de construir una acción colectiva que trascienda los contextos locales (Reardon, Timmer y Berdegué 2005). En este sentido, las estructuras de gobernanza asociadas con las certificaciones territoriales de calidad resultan progresivamente inapropiadas para comprender y gestionar las dinámicas estructurales, al generar, no sólo crecientes asimetrías de información y problemas de selección adversa, sino también restricciones institucionales a la iniciativa de los actores rurales. Alternativamente, la acción colectiva debe trascender el ámbito territorial, asumiendo que la gestión de recursos inmateriales impone

una mayor incidencia y un mayor conocimiento de los mercados lejanos, de los contextos no locales (Friedmann y Mcnair 2008). Para ello, es necesario incorporar en los esquemas de acción colectiva y en las propias estructuras territoriales de gobernanza a los mediadores cognitivos que, desde el desarrollo de funciones de sistematización, conexión, interpretación y validación (lo que permite incorporar, a su vez, a las denominaciones de origen), realizan tareas esenciales en la generación de valor y en su apropiación territorial, en una economía basada en el conocimiento.

Para el contexto rural latinoamericano, esta reflexión resulta enormemente importante. Por un lado, porque el crecimiento de las clases medias urbanas en las últimas décadas está abriendo nuevos nichos de mercado para sus producciones de calidad. Por otro lado, el mundo rural latinoamericano conserva un potencial de resignificación de sus producciones, como se pone de manifiesto en la potencia de los discursos sobre el “buen vivir”, que lo hace especialmente proclive a aprovechar materialmente estas transformaciones estructurales. Es importante partir de la experiencia real de los actores, romper con las mediaciones abstractas, como pueden ser las retóricas culturalistas del “buen vivir” o, por el contrario, la exportación mecánica de modelos de calidad surgidos en otros contextos diferentes, como el europeo.

2. Las mediaciones cognitivas y su importancia para el desarrollo rural.

En el contexto económico actual, donde el conocimiento se ha erigido como una variable estructural en los procesos de generación de valor, tan importante como comprender los

procesos productivos “materiales” que se gestan en la comunidad local, resulta analizar la dimensión inmaterial de los procesos de valorización y el papel de los diferentes actores de la cadena de valor en dichos procesos. Para aproximarse a esta dimensión y al rol de los actores implicados en ella, lo rural debe comprenderse como una combinación compleja de procesos productivos, relaciones de poder, representaciones, discursos y entramados institucionales variados (Cloke 2006; Dewsbury 2003). Igualmente, frente a la concepción neoliberal del territorio, se hace necesario tomar en consideración las variables y los instrumentos que permiten desarrollar la capacidad territorial de apropiación de valor en una economía basada en el conocimiento, pues los territorios no son meras mercancías que se reinventan permanentemente mientras se fortalece la lógica depredadora y rentista de los capitales locales y extraterritoriales (Marazzi 2008; Vercellone 2008). En este sentido, es importante comprender cómo se genera valor en una economía basada en el conocimiento, pero también es decisivo identificar aquellos eslabones críticos, aquellas vulnerabilidades, donde los actores locales suelen mostrar más dificultades a la hora de apropiarse territorialmente del valor generado en dichas economías.

Para abordar estas cuestiones, trabajamos con un modelo de generación de valor a partir de la producción de conocimiento (E) que deriva del ensamblaje de tres “drivers” (Rullani 2004a): la capacidad de interpretación por parte de los consumidores de los significados incorporados en la producción material de alimentos (v), la cantidad de veces que se propagan y replican estos significados (n), y la capacidad de apropiación del valor generado

entre los distintos actores que participan en su producción y sostenimiento (p_i , donde $0 \leq p_i \leq 1$), podríamos formular dicho modelo mediante la siguiente ecuación:

$$E = v \cdot n \cdot p_i$$

Tomando como referencia este modelo, las investigaciones realizadas en diferentes casos de estudio nos advierten de varias circunstancias preocupantes en la evolución de las denominaciones de origen españolas (Macías Vázquez y Alonso González, 2015a). Por un lado, en denominaciones de origen de aceite de oliva y vino, se pone en evidencia que la ausencia de innovaciones organizativas a nivel colectivo les impide apropiarse (p_i) del valor generado como resultado de la implantación de los signos de calidad, que, paradójicamente, ha mejorado la percepción de los consumidores de la mejora en la calidad del producto (v) y ha facilitado la propagación de los conocimientos y prácticas locales a través de una exitosa estrategia de codificación en los mercados (n). Como resultado de esta incapacidad de regular y de apropiarse de la producción de valor, los productores locales se han visto forzados a intensificar todavía más los cultivos para mantener sus niveles de renta, lo cual ha tenido consecuencias negativas a nivel medioambiental y en la propia calidad y seguridad alimentaria (erosión y envenenamiento de los suelos, residuos químicos en los alimentos, pérdida de biodiversidad, ...). En buena medida, estas dinámicas trágicas señalan que la transición hacia economías del conocimiento cuestiona las formas tradicionales de certificación geográfica de la calidad, al no dar cuenta de los aspectos relacionales del conocimiento y concebir producción y consumo de forma estanca y aislada (Chiffolleau 2009). De hecho,

la producción y el uso del conocimiento son actividades intrínsecamente sociales, que implican la generación de significados, valores, símbolos y sentidos que adquieren valor solamente si otros los comparten y se los apropián. Por ello, la economía del conocimiento es una economía de conexiones y de flujos en permanente retroalimentación, donde resulta imposible separar la producción y el consumo en la medida en que este último también implica una actividad de producción cognitiva (Goodman 2016).

Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han constituido ciertamente en un potente mediador para articular la propagación de significados, valores y conocimientos en redes e interacciones a distancia, no limitadas al ámbito local. Pero, paralelamente, esta mayor capacidad de propagación cognitiva (n) ha puesto de manifiesto una menor capacidad de regulación de la producción de valor (pi) por parte de aquellas estructuras tradicionales de acción colectiva, organizadas a escala local. En buena medida, porque esta mayor capacidad de propagación ha implicado la necesidad de explorar nuevos contextos sociales, en concreto, de comprender los significados, los valores y los deseos que están detrás de las prácticas de consumo alimentario (que influyen directamente en "v"), lo cual conlleva plantearse los problemas de la acción colectiva en una escala más amplia y con unos contenidos y mediaciones diferentes.

En estas circunstancias, el problema que se plantea en líneas generales es el siguiente: cómo transformar un conocimiento original, desarrollado en un contexto α , en un conocimiento conectivo, que permita su re-

utilización en diferentes contextos β , teniendo en cuenta que α y β son contextos diferentes, con actores, recursos, un medio ambiente y un tejido de relaciones sociales específicos (Rullani, 2004b). La integración del conocimiento, en este sentido, no puede abordarse como un proceso lineal, automático y mecánico, dada la naturaleza específica de los recursos locales. Por ello, se necesita articular una serie de mediadores cuya función sea fortalecer la integración de los conocimientos, de tal forma que se pueda minimizar este riesgo de fragmentación (Rullani 2004b). Los mediadores cognitivos son dispositivos metodológicos y prácticos que transforman el conocimiento original en conectivo (definido en el campo $\alpha-\beta$) y mantienen su eficacia a lo largo del tiempo. Existen dos tipos de mediadores cognitivos; por un lado, los prescriptivos (actúan estandarizando los comportamientos y significados de las acciones de los diversos actores) y, por otro lado, los experienciales (el acceso al conocimiento viene regulado por la participación directa en la experiencia de la vida y de trabajo que se desarrollan en los diversos puntos del campo). (Rullani 2004b: 54-56). De manera esquemática, clasificamos estos mediadores en la siguiente tipología de operadores, que llamaremos "mediadores cognitivos":

- Sistematizadores: ensamblan la producción de conocimientos de cada especialista particular en un determinado contexto territorial, suelen tomar la forma de asociaciones de productores, asociaciones de desarrollo territorial, agencias de inteligencia comarcal, etc.
- Conectores: vinculan conocimientos generados en contextos diversos, toman la forma de redes, plataformas, encuentros periódicos o jornadas puntuales.
- Intérpretes: re-contextualizan los conocimientos originales para que puedan ser utilizados en contextos

diferentes, trabajan sobre los deseos del consumidor, toman la forma de mercados alternativos, museos, organizaciones de consumidores, centros de dietética o, incluso, de agencias de viaje.

- Validadores: intervienen sobre la incertidumbre en la validez del uso del conocimiento en los diferentes contextos, pueden basarse en el desarrollo de la participación y de las relaciones de confianza (sistemas participativos de calidad) o en la construcción de indicadores objetivos (como las certificaciones territoriales de calidad).

De aquí la necesidad de analizar las nuevas formas de acción colectiva en una sociedad posindustrial, entendida como espacio de intercambio cultural y simbólico (Hassanein 2003).

3. Análisis de los casos de estudio.

A continuación, teniendo en cuenta los elementos teóricos y metodológicos que hemos abordado más arriba, analizamos sintéticamente algunos casos de estudio españoles y latinoamericano con el objetivo de responder a los objetivos planteados en la introducción del trabajo.

3.1. Sierra Mágina (Andalucía, España).

El trabajo de campo realizado en Sierra Mágina se produjo entre octubre y enero de 2020. La metodología implementada se toma prestada del campo de la etnografía y se basa en la realización de 30 entrevistas semiestructuradas y no estructuradas con actores involucrados en la DO: gerentes de almazaras, agentes comerciales, ejecutivos de la DO, representantes de la administración provincial, representantes de la Asociación de Desarrollo Rural, y productores. También se han utilizado fuentes documentales proporcionadas por organizaciones profesionales, comunicados de

prensa, informes gubernamentales y legislación para construir un contexto de interpretación.

El cultivo del olivar en la provincia de Jaén se remonta hasta la Antigüedad, pero el desarrollo del olivar contemporáneo se producirá en el siglo XX. Así, la producción de olivar representaba en 1900 un 25,5% del total de producción agraria y en 1998 ya representaba un 89,2% del dicho total (Zambrana Pineda 2006).

La comarca oleícola de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, se corresponde con un sistema productivo local de aceite de oliva que se ha organizado mayoritariamente en torno a una Denominación de Origen que presenta un alto grado de dinamismo (Sanz Cañada y Macías Vázquez 2005). Un aspecto interesante en la puesta en valor del territorio es el hecho de contener en su interior un Parque Natural. La comarca tiene una orografía muy pronunciada, llevándose a cabo el cultivo del olivar en pendientes medias superiores al 15% y una altura entre los 600 y 1300 metros y casi la mitad en regadío, encaminándose hacia estrategias de calidad en su producción. En el sector del aceite de oliva de Sierra Mágina se observa una importante dinámica de cambio tecnológico en procesos y productos, tanto en la agricultura como en la industria. Tanto es así, que un producto que tradicionalmente era desechado como el hueso de aceituna, hoy es utilizado como fuente de energía para calefacción. Esta dinámica todavía no ha sido correspondida por un proceso de cambio organizativo y en las estrategias de comercialización llevadas a cabo por las instituciones de gobernanza. Este hecho, junto con los problemas medioambientales que ha generado un sistema intensivo de producción, conforman los principales ejes de una estrategia futura de desarrollo sostenible para la comarca.

En Sierra Mágina, asistimos a tres lógicas de funcionamiento económico, con características estructurales diferenciadas y que discurren en un sentido paralelo, dual, prácticamente sin retroalimentación entre estas experiencias. Por un lado, se encuentran las grandes fincas, que se organizan en torno a empresas privadas y que suelen desarrollar una inserción activa en los canales de comercialización por medio de estrategias marquistas y de experiencias exportadoras. Por otro lado, se encuentran las fincas pequeñas productoras de aceite convencional, que se agrupan en cooperativas de primer grado y que a menudo se adaptan pasivamente a las circunstancias de los mercados vendiendo sus producciones de aceite a granel. Por último, existen experiencias de producción de aceite de oliva ecológico, respetuoso con el medioambiente y compatible con el desarrollo sostenible. A pesar de esto, su peso dentro de la producción en la Denominación de Origen no llega al 2% de la producción. A pesar de sus posibilidades de exportación (los mercados internacionales demandan cada vez más este tipo de producto), los olivicultores no encuentran rentable este tipo de cultivo debido al aumento de las labores agrarias y al coste del mismo.

En Sierra Mágina, no existe una gran distribución organizada. La producción de aceite suele ser comprada por envasadoras españolas e italianas a través de corredores locales (Rodríguez-Cohard y Parras 2011). Debido a su grado de concentración oligopólica, la gran distribución moderna ejerce un considerable poder de mercado, incluso las empresas privadas que desarrollan una estrategia marquista tienen grandes dificultades para conseguir un espacio en los lineales de la gran distribución, quedando muchas veces sus posibilidades

reducidas a otros canales más minoritarios de comercialización (tiendas de “delicatessen”, venta por internet, cadenas de restaurantes, ...). En el caso de las almazaras cooperativas, las circunstancias son mucho más preocupantes. En muchas ocasiones, la producción de mayor calidad, no destinada a la venta a granel, se comercializa de forma directa en la almazara o en establecimientos de la zona. En muchas otras ocasiones, aceites de gran calidad provenientes de estas almazaras cooperativas son vendidos a granel a grandes distribuidoras de aceites que realizan la técnica del coupage con aceites de menor calidad, perdiendo así la distinción de calidad.

Uno de los desafíos más importantes de los productores oleícolas de la comarca es incrementar su participación en la cadena de valor que genera la venta del aceite de oliva, que actualmente se reparte desigualmente en beneficio de las envasadoras y especialmente de la gran distribución, produciéndose una apropiación rentista del valor. En realidad, el carácter crecientemente rentista de las élites empresariales lleva a la apropiación externa del valor inmaterial producido por estas comunidades, que no obstante continúan enfocando su atención colectiva en cuestiones prácticas de producción material. La valorización de los productos materiales se origina crecientemente en procesos de producción simbólica, que da lugar a una apropiación de dicho valor generado mediante la forma de renta por parte de actores extraterritoriales o élites locales. Esta dinámica económica lleva, en última instancia, al desempoderamiento de estas comunidades, tanto frente a élites locales como a entidades multinacionales, obligando a las primeras a intensificar la explotación de los recursos materiales comunes para mantener

sus niveles previos de ingreso (Macías Vázquez y Saavedra Gallo 2020). Empezar a enfrentar esta situación caracterizada por una fuerte asimetría en las relaciones de poder de mercado en un sentido vertical, requiere por parte de los productores un impulso de la cooperación horizontal, en particular promoviendo las experiencias de comercialización en común por parte de las almazaras cooperativas. En este ámbito, la iniciativa de Aceites Andaluces Sierra Mágina fue muy importante, de la que hay que extraer lecciones, incluso desde el punto de vista de las razones que explican su relativo fracaso.

En definitiva, el alto grado de incorporación de innovaciones en bienes de equipo, tanto en la olivicultura como en la industria de transformación, no ha solucionado los problemas de puesta en valor del aceite, lo que requiere innovaciones a nivel organizativo y comercial. Esta situación nos permitió concluir que, dentro de una estrategia de valorización, las innovaciones en procesos y productos constituyen solamente una condición necesaria de una verdadera puesta en valor del aceite. Las condiciones suficientes para una valorización a largo plazo de la producción están relacionadas con la consideración de un concepto más amplio de calidad, que tenga en cuenta las dimensiones organizativa, medioambiental y comercial. En el contexto de unos mercados cada vez más exigentes con respecto a la seguridad de los alimentos y donde la saturación del consumo solamente puede ser contrarrestada, por parte de los sistemas productivos locales, mediante procesos de diferenciación del aceite con vinculación a las particularidades territoriales de la producción oleícola, a través de denominaciones geográficas, se concluye que la definición de unos códigos de buenas prácticas

en materia de desarrollo sostenible juegan una función esencial para llevar a cabo una estrategia de valorización. Los códigos de buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible deberían de incorporar al menos tres tipos de objetivos: las prácticas agroambientales sobre el manejo del suelo, la olivicultura ecológica y la producción integrada, así como el tratamiento de los residuos y subproductos procedentes de la actividad agraria y agroindustrial (Sanz Cañada y Macías Vázquez 2005).

No obstante, la preocupación por el desarrollo sostenible no procede exclusivamente de las presiones de la demanda, sino también de una elevada presión al alza de la oferta mundial de aceite de oliva, de mayor intensidad en el corto plazo que en el caso de la demanda. Teniendo en cuenta la existencia de un alto porcentaje de olivar de montaña y el amplio recurso a técnicas intensivas de cultivo, como el uso de abonos químicos o productos fitosanitarios, se plantea que las políticas agrarias deberían de modificar su estructura de incentivos, desplazando su objetivo principal desde la maximización actual del nivel de producción a la sostenibilidad ambiental y a la calidad del producto y la seguridad alimentaria. En caso contrario, se agravarán los problemas de erosión, de uso ineficiente del agua y de pérdida acelerada de la materia orgánica del suelo, que afectan en gran intensidad al olivar en pendiente de la Cuenca Mediterránea.

Se concluye también que son los procesos de organización y coordinación colectiva entre los agentes que participan en el funcionamiento de la Denominación de Origen, los que tienen una incidencia directa y significativa en la posición competitiva de estos sistemas productivos locales, en la medida en que pueden contribuir

a la reducción de las relaciones asimétricas en el interior de la cadena agroalimentaria, mejorando la capacidad de fijar e incrementar el valor económico en las propias zonas rurales. Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen van a desarrollar funciones que van más allá de las establecidas en la legislación nacional y europea, como la coordinación de los procesos de difusión de innovaciones y de los conocimientos o de las actividades interprofesionales a escala local, que resultarán decisivas para la mejora competitiva de estos territorios rurales. Además, a partir del trabajo de campo realizado se concluye que las certificaciones geográficas de calidad están comenzando a incorporar a la noción de calidad atributos medioambientales y de desarrollo sostenible, que pueden contribuir sustancialmente a reducir las relaciones asimétricas que se reproducen en la cadena agroalimentaria entre los productores locales y los representantes de la Distribución Moderna.

3.2. Yachay (Ecuador), economía del conocimiento, economía popular y solidaria

El trabajo de campo realizado en Yachay se llevó a cabo entre agosto y noviembre de 2013. Fue llevado a cabo bajo el método etnográfico, bajo la técnica de “seguir a los actores” (Latour 2013). Se realizaron un total de 35 entrevistas semiestructuradas y libres con agentes cercanos a la comunidad tales como organizaciones no gubernamentales, asociaciones, autoridades y personas relevantes de la sociedad.

Este estudio de caso derivó en una crítica del enfoque que las autoridades ecuatorianas estaban dándole al proyecto de Yachay, basado en una concepción ortodoxa de la economía del conocimiento (modelo de “triple hélice”). A partir

de esta reflexión crítica, se comenzó a trabajar en una visión alternativa de la transición hacia una economía del conocimiento en el país. En la medida en que en la misma la cuestión de los bienes comunes juega un rol central, esto le llevó a entrar en un análisis crítico, de la estrategia de desarrollo seguida en Ecuador y de su eje articulador, el Buen Vivir, reconociendo los importantes logros alcanzados en los últimos años.

Básicamente, el planteamiento central de nuestra investigación consistía en que la capacidad de Yachay para contribuir a la transición hacia una economía del conocimiento tiene más que ver con dos cosas. Por un lado, con su forma de ensamblarse a la realidad socioeconómica ecuatoriana y, por otro lado, con su capacidad para superar las lógicas que prevalecen en las concepciones ortodoxas de la economía del conocimiento (Macías Vázquez y Alonso González 2016a). La clave para lograr esta superación de las concepciones ortodoxas se encuentra en dos cuestiones. En primer lugar, sería necesario considerar en positivo las propiedades del conocimiento como bien común. En segundo lugar, resulta decisivo preguntarse con mayor profundidad sobre las implicaciones que subyacen en la construcción del conocimiento como bien común.

En consecuencia, la clave del éxito en una transición a la economía del conocimiento consiste en la adopción de una estrategia adecuada para la propagación cognitiva. Para ello, en primer lugar, conviene tener presente los posibles conflictos que puedan derivarse de la adopción de una estrategia de clusterización y de apropiación privada en Yachay. En cierta medida, estos conflictos podrían atenuarse introduciendo criterios sociales en el proceso

de capitalización del conocimiento (Alonso González y Macías Vázquez 2015a). Por ejemplo, reconociendo la apropiación privada de las innovaciones surgidas en la ciudad del conocimiento, pero estableciendo mecanismos obligatorios de transferencia de los resultados obtenidos al conjunto de la sociedad. De esta manera, no sólo se evitaría que los fondos públicos invertidos en la ciudad del conocimiento se convirtiesen en subsidios al sector privado, sino que Yachay terminase funcionando una maquila de segunda generación, una ciudad chárter o una zona franca.

Este tipo de estrategias atenuadoras no representa una propuesta alternativa en materia de propagación cognitiva, pero limita los efectos negativos que la apropiación privada y la concentración territorial tienen sobre la difusión de los conocimientos. Como complemento al tipo de ciudad de conocimiento que se deriva de la aplicación del “modelo de triple hélice”, sería interesante reflexionar sobre un modelo de gestión territorial del conocimiento que permita una socialización amplia del mismo. La creación de una red de mediadores facilitaría la propagación inteligente de los conocimientos, tanto en el tiempo como en el espacio. Yachay podría proyectarse como el nodo central de una red de mediadores que conectase las dinámicas globales y locales implicadas en la transición hacia una economía del conocimiento. De esta manera, se podría articular territorialmente una lógica más expansiva donde predominase el establecimiento de interacciones con las comunidades y el tejido social del país y no sólo las interacciones intensivas entre actores muy especializados en el marco estricto de la “ciudad del conocimiento”. Con el tiempo, esta forma de propagación cognitiva revertiría posteriormente en un proceso de producción de conocimientos

que generaría un valor global mucho mayor (Alonso González y Macías Vázquez 2015a).

En este marco, sería interesante replantear la política de promoción de la economía popular y solidaria, demasiado centrada en la formalización contable y fiscal de sus unidades productivas. En realidad, el problema de fondo es otro muy distinto. Más que integrar dicha economía en la lógica extractivista, como se puede observar en algunos proyectos promovidos por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (por ejemplo, en la extracción del camarón o en la floricultura), sería más interesante articular la transición hacia una economía difusa del conocimiento desde el sector productivo popular y solidario. De tal manera, construyendo mediaciones con las economías urbanas se podría generar un proceso de propagación cognitiva que ponga en valor los diversos modos de vida existentes en el país, perfilando bienes comunes culturales y simbólicos que inhiban la imposición de unos modos de vida sobre otros a través de los patrones de consumo.

Algunas experiencias analizadas durante la estancia señalada en el país, como la de la cooperativa de producción y consumo “Coopera”, representaban fielmente ese tipo de mediadores que necesita la transición hacia una economía basada en el conocimiento. En “Coopera”, las comunidades campesinas cercanas a la ciudad de Cuenca y los habitantes urbanos de dicha ciudad constituyeron una cooperativa basada en la producción y consumo de alimentos ecológicos. “Coopera” puede ser considerada un intérprete en el esquema de mediador cognitivo, ya que relacionan conocimientos tradicionales y los tratan de forma alternativa. Lo interesante de esta experiencia es que llegaron

a integrarse en la cooperativa 150.000 de los 500.000 habitantes de la ciudad. En Cuenca, era imposible encontrar centros comerciales repletos de establecimientos de “comida rápida” importada. Al igual que ocurría con la compra en supermercados, los consumidores acudían los fines de semana a los restaurantes de “Coopera” para comer menús de comida ecológica y local por un precio muy competitivo.

3.3. Carril (Galicia, España).

La información relativa a los datos sociales y económicos a escala local y nacional se ha obtenido de fuentes estadísticas de las administraciones públicas y de noticias de periódicos y revistas. La información etnográfica que aporta datos cualitativos ha implicado un trabajo de campo en Carril, donde se han realizado doce entrevistas semiestructuradas entre junio y noviembre de 2012.

Los debates académicos en torno a la gestión de las pesquerías se han intensificado en las últimas décadas, como resultado del fracaso de las fórmulas puestas en marcha durante la segunda mitad del siglo XX para enfrentar la sobreexplotación de los recursos comunes. En la actualidad, los cambios tecnológicos, el mayor protagonismo de los sistemas expertos y la globalización de los mercados generan escenarios altamente complejos e intensamente cambiantes, que rápidamente convierten en obsoletas las formas de gobernanza utilizadas para evitar las dinámicas trágicas. Tras el fracaso de los esquemas de gobernanza fundamentados en una ontología que destacaba el rol del pescador que competía individualmente en la explotación de recursos comunes de acceso abierto, se han ido planteando otros enfoques alternativos donde

los criterios de gobernanza ya no se basan en la existencia de un agente individual oportunista y depredador, que requiere un control político exógeno mediante la institucionalización de los derechos de propiedad (Macías Vázquez y Alonso González 2015b). No obstante, en estas nuevas concepciones de las estructuras de gobernanza, que reconocen progresivamente la relevancia de la comunidad y los bienes comunes en el desarrollo sostenible, el enfoque epistemológico es siempre el mismo: la cuestión es cómo evitar que el esfuerzo pesquero se traduzca en el surgimiento de las dinámicas trágicas. En realidad, se piensa que el problema consiste básicamente en recuperar los stocks de especies marinas y no tanto en reconstruir globalmente la cadena de valor, desde el ecosistema marino hasta el consumidor final. En consecuencia, las políticas de gestión de los recursos pesqueros comunes continúan concibiéndose de forma reactiva en función de las amenazas exógenas en cada contexto particular. En buena medida, estas iniciativas políticas suelen fracasar en sus objetivos conservacionistas precisamente por su tendencia a focalizar el análisis en las relaciones entre los cambios en la gestión y la recuperación de los stocks, relegando a un segundo plano el impacto de las amenazas exógenas sobre el nivel de vida de los pescadores y las relaciones de poder en el contexto territorial.

En consecuencia, se necesita una aproximación alternativa al problema de la gobernanza en las comunidades pesqueras. Trabajos recientes apuntan ideas interesantes al realizar un análisis comparativo con las estrategias de generación de valor que han desarrollado las comunidades rurales en la búsqueda creativa de niveles sostenibles de vida. Bajo este planteamiento,

resulta crucial concebir a los productos del mar como alimentos. Es decir, se trata de un marco interpretativo que no se detiene en las cuestiones relativas a la sobreexplotación, sino que incluye las actividades de distribución y uso. Con la intención de abarcar analíticamente a todos los actores de la cadena de valor, se tiene en cuenta la interacción entre las prácticas de producción y de consumo. Por ello, esta investigación, en lugar de continuar haciendo énfasis en las exigencias biológicas de los programas de certificación puestos en marcha en el ámbito de las pesquerías, pone el punto de mira en las diferencias culturales y la consiguiente acumulación de capital simbólico común en la gestión de la cadena de valor.

En una economía cognitiva, como decíamos, la generación de valor está relacionada con la fricción entre los vectores materiales e immateriales presentes en la actividad económica. De hecho, resulta tan importante comprenderlos procesos productivos materiales en la comunidad local como los procesos por los que las cadenas globales de valor expropian o co-optan el capital simbólico común. En este contexto, la gobernanza de los recursos materiales comunes no puede desvincularse de la gestión del capital simbólico común generado como resultado de la reputación que las producciones, prácticas y conocimientos locales poseen entre los consumidores finales. Una conclusión fundamental de este estudio es que, para invertir la dinámica trágica y la reestructuración regresiva de las relaciones de poder en la acuicultura artesanal de Carril, no basta con establecer medidas reactivas de carácter conservacionista, sino que se tiene que asumir un rol proactivo en la gestión de las pesquerías, particularmente en la gestión colectiva del capital simbólico común.

En Carril, la comunidad de acuicultores artesanales muestra una pérdida progresiva de agencia como consecuencia de las serias deficiencias en la gestión de su propio capital simbólico común. Mientras que las estrategias rentistas de los depuradores y los distribuidores mayoristas les permiten captar una franja creciente del valor añadido asociado al importante capital simbólico común acumulado históricamente, los productores locales destruyen el recurso común material mediante la intensificación de los cultivos y la sustitución de las especies autóctonas para alcanzar más altos rendimientos y compensar la devaluación de sus ingresos como consecuencia de su pérdida de relevancia en la cadena de valor. En realidad, el desempoderamiento de la comunidad local es el resultado de la incomprendición sobre cómo se genera y se apropiá valor en una economía basada en el conocimiento. En el caso de Carril, el problema no se encuentra tanto en la capacidad de interpretación del consumidor, que se mantiene fiel al consumo de su almeja. En esta investigación, se concluye que los problemas se concentran en otros dos ámbitos fundamentales. Por un lado, se constata que la multiplicación del capital simbólico común asociado a la comercialización de la producción artesanal de moluscos en Carril es elevada, pero en el modo en el que se lleva a cabo actualmente tiende a difuminar la identidad del producto y la comunidad local debido a la venta masiva de producción foránea con la etiqueta “almeja de Carril”. Por otro lado, la mala gestión que la comunidad local realiza de su capital simbólico común facilita la adopción de estrategias rentistas por otros actores de la cadena, lo cual se refleja en un diferencial creciente en los precios de la almeja en la lonja de Carril y los precios que paga el consumidor final.

4. Conclusiones.

En nuestro trabajo de investigación, constatamos que las formas de organización y producción diferencial de recursos agroalimentarios se asientan en conocimientos comunes inmateriales locales difícilmente replicables en otros territorios diferentes: conocimientos implícitos, informales y prácticos, saber-hacer artesanal, redes de contactos, información, cooperación e intercambio de favores, entre otros. Por otro lado, las comunidades locales, que encarnan estos conocimientos, son crecientemente mediadas por procesos reflexivos de consumo y de producción que incorporan valores estéticos exógenos, que son incluidos en los procesos de producción de localidad. Así, los activos inmateriales comunes son el resultado de la cristalización histórica de un conjunto de prácticas, relaciones sociales, cualidades físicas e ideas desarrolladas por un grupo humano, que pueden ser percibidas por otros grupos, mercados o estados como 'diferentes', y de esta manera ser objeto de un proceso de valorización. En este sentido, las marcas de distinción desarrolladas por el capitalismo posindustrial para mantener la explotación monopolística del valor a través de rentas sobre los recursos naturales requieren de la participación de dichos activos comunes inmateriales, que confieren valor añadido en dicho proceso. En esta lógica, por parte de las élites locales y transnacionales se produce una intensificación de la expropiación de los comunes y sus plusvalías mediante la generación de rentas y el endurecimiento de distintas formas de cercamiento inmaterial, como copyrights, patentes y marcas comerciales. Ante esta situación, la lucha de las comunidades locales por mantener un control sobre el valor de sus producciones ya no deriva tanto de la

organización de la explotación de los recursos naturales en sí misma, sino del control de los comunes inmateriales y de su modulación con la gestión de los recursos naturales.

Cuando las rentas asociadas a los activos inmateriales comunes son apropiadas por las élites, el problema fundamental consiste en que las comunidades ven disminuidas fuertemente sus posibilidades de captar territorialmente el valor generado por su propia actividad productiva. En general, sufren un proceso de desempoderamiento en relación al control de los procesos de generación de valor, más acusado en Latinoamérica, que suele derivar en una sobreexplotación insostenible de los recursos naturales para intentar mantener los niveles de ingreso previos. Habitualmente, las comunidades fracasan en este intento desesperado. El medio ambiente se deteriora rápidamente y los recursos agroalimentarios se degradan o se agotan a gran velocidad. Como resultado, las élites locales suelen salir también perjudicadas, mientras que las élites transnacionales buscan otros territorios alternativos para reproducir su estrategia rentista depredadora. De cara al desarrollo sostenible de estos territorios, la cuestión clave sería cómo lograr controlar la gestión de los activos inmateriales comunes, de tal manera que las rentas que actualmente se apropián las élites locales y transnacionales puedan ser objeto de una distribución más equitativa a nivel territorial, evitando de esta manera la sobreexplotación de los recursos naturales.

En nuestro estudio de caso sobre los procesos de sobreexplotación de los recursos marisqueros en zonas costeras de Galicia, hemos identificado claramente esta problemática. En otros casos, como en Sierra Mágina, hemos

puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias territoriales de organización de la calidad (denominaciones de origen) vinculando el aprovechamiento colectivo de las rentas simbólicas con la incorporación del medio ambiente a los criterios de calidad. En todos los casos, hemos destacado la importancia inicial del marco institucional para activar dinámicas territoriales endógenas y sostenibles ambientalmente. En buena medida, la persistencia de un marco institucional de carácter corporativo (pero con una retórica neoliberal y modernizadora) e hibrido con estructuras clientelares más tradicionales (Alonso González y Macías Vázquez 2014), representa el principal obstáculo para revertir estas situaciones. De hecho, este “neoliberalismo corporativo” alimenta las dinámicas sociales que mantienen a las comunidades locales enquistadas en estrategias de sobreexplotación de los recursos naturales. A este respecto, es llamativo observar cómo la mayoría de las administraciones locales y regionales apoyan a determinadas burguesías locales y/o extraterritoriales bajo retóricas modernizadoras, alimentando la dinámica que impide desarrollar una acción colectiva integradora a partir de la gestión del capital simbólico común.

En los estudios de caso, se ha puesto de manifiesto que las comunidades locales tienden a concentrarse en la explotación de los recursos naturales, en sí misma, y descuidan la gestión de los valores inmateriales (certificaciones de calidad, labels, marcas, etc.). Esto se produce habitualmente por una falta de comprensión de cómo se genera valor en una economía postindustrial, donde el conocimiento juega un rol creciente en los procesos de producción y de consumo. Así, son actores externos los que se aprovechan de los recursos inmateriales

del territorio, intensificando las relaciones asimétricas de poder de mercado que terminan impactando negativamente en la capacidad de las comunidades locales para reproducir el propio valor de la producción basada en los recursos naturales, como consecuencia de la degradación del medio ambiente.

Ahora bien, el capital simbólico común (según la conceptualización de Bourdieu y Harvey) solamente se valoriza si su gestión se coordina con la acción colectiva tradicional vinculada con los procesos de producción basados en los recursos naturales. En esta dirección, juegan un rol fundamental las estrategias de labelización y de certificación agroalimentaria a escala territorial (Harvey 2012). Sin embargo, constatamos que estas estrategias representan una condición necesaria, pero no suficiente. En una economía cognitiva donde la generación de valor está asociada a una recreación permanente de los significados de las producciones, se requiere el desarrollo de habilidades y competencias más específicas que permitan articular estrategias dinámicas de modulación de los vectores materiales e inmateriales asociados a la captación territorial de rentas¹. Teniendo en cuenta la ventaja competitiva que poseen las élites transnacionales a la hora de recrear estos significados y de vincularlos a los consumidores y al mercado global, esta modulación adquiere una importancia

¹ En el ámbito de las producciones alimentarias, existen diversos instrumentos para modular la relación entre vectores materiales e inmateriales, que buscan establecer relaciones simbólicas entre procesos productivos comunitarios y vinculaciones geográficas (denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, labels territoriales, etc.), históricas (tradiciones locales), productos (variedades de uvas, de aceitunas, de moluscos, etc.), calidades (propiedades organolépticas, producción ecológica o integrada, vino sin sulfitos, etc.), actividades sociales (ferias gastronómicas, concursos culinarios, etc.) o formas de hacer (pesca artesanal, técnicas agrarias y agroindustriales, etc.).

estratégica para los territorios rurales basados en la producción agroalimentaria.

Para ello, resulta fundamental replantear el debate teórico sobre la gobernanza de los bienes comunes, modificando sustancialmente las preguntas centrales que han definido su contenido (Macías Vázquez y Alonso González 2016b). En lugar de preguntarnos sobre qué tipo de gobernanza es necesaria para evitar el agotamiento de los recursos naturales escasos (Ostrom, 1990), creemos que resultaría más interesante preguntarse sobre los procesos de acción colectiva que permiten desarrollar

los comunes inmateriales que se generan en los procesos de explotación de los recursos naturales, como una manera de garantizar la sostenibilidad de estos últimos a largo plazo. Sin embargo, en el análisis de los casos, constatamos que se ha prestado especial atención a la acción colectiva que subyacía a la reproducción de los recursos naturales comunes en sí mismos, como bosques, recursos pesqueros o producciones agrarias locales. Por el contrario, se ha prestado menos atención a la acción colectiva de comunidades locales en relación a la gestión de sus activos inmateriales.

Bibliografía

- Alonso González, P. y Macías Vázquez, A. 2015. "An ontological turn in the debate on Buen Vivir – Sumak Kawsay in Ecuador: ideology, knowledge and the common", *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, Vol. 10, nº. 3, pp. 315-334
- _____. 2014. "Neoliberalismo corporativo y clientelismo en España: Etnografía de la financiación europea del desarrollo rural a través de un proyecto fallido", *AIBR. Revista Antropología Iberoamericana*, 9 (3), pp. 223-250.
- Belletti, G., Marescotti, A. y Brazzini, A. 2017. «Old World Case Study: The Role of Protected Geographical Indications to Foster Rural Development Dynamics: The Case of Sorana Bean PGI». En Van Caenegem y Cleary (Eds.), *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, Cham, Springer, pp. 253-76.
- Chiffolleau, Y. 2009. «From politics to co-operation: The dynamics of embeddedness in alternative food supply chains», *Sociología ruralis*, 49 (3), pp. 218-35.
- Cloke, P. 2006. *Conceptualizing rurality*. In *Handbook of rural studies*, eds Cloke, P.J., Marsden, T. and Mooney, P.H., 18-28. London, Thousand Oaks: SAGE.
- Dewsbury, J.D. 2003. Witnessing space: Knowledge without contemplation. *Environment and Planning A* 35 (11), pp. 1907-32.
- Friedmann, H., y McNair, A. 2008. Whose rules rule? Contested projects to certify 'local production for distant consumers' *Journal of Agrarian Change*, 8(2-3), 408-434.
- Goodman, M. K. 2016. Food geographies I: Relational foodscapes and the busy-ness of being more-than-food. *Progress in Human Geography*, 40(2), 257-266. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00175.x>
- Grunert, K. G. y Achmann, K. 2016. Consumer reactions to the use of EU quality labels on food products: A review of the literature. *Food Control*, 59. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.05.021>
- Harvey, D. 2012. *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. London and New York: Verso Books.
- Hassanein, N. 2003. "Practicing food democracy: a pragmatic politics of transformation", *Journal of Rural Studies*, 19 (1), pp. 77-86.
- Latour, B. 2013. *An inquiry into modes of existence*. Harvard University Press.
- Lucatelli, S. 2000. Appellations of origin and geographical indications in OECD member countries: economic and legal implications. In OECD, *Directorate for food, agriculture and fisheries, trade directorate* (pp. 301-317). OECD.
- Macias Vázquez, A., y Alonso González, P. 2016a. "Between 'Neodevelopmentalism' and 'Postdevelopmentalism': Towards a theory of a dispersed knowledge economy in Ecuador", *Canadian Journal of Development Studies*, Vol. 37, nº 1, pp. 47-65.
- _____. 2016b. "Knowledge Economy and the Commons: A Theoretical and Political Approach to Post-Neoliberal Common Governance", *Review of Radical Political Economics*, 48 (1), pp. 140-157.
- _____. 2015a. "Managing collective symbolic capital through agro-food labelling: Strategies of local communities facing neoliberalism in Spain", *Journal of Rural Studies*, 41, pp. 142-152.
- _____. 2015b. Collective symbolic capital and sustainability: Governing fishing communities in a knowledge economy. *Marine*

- Policy, 53, 21–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.11.014>
- Macías Vázquez, A., & Saavedra Gallo, G. 2020. 643. Diferencias territoriales, sostenibilidad y comunes inmateriales en las costas australes chilenas. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 24.
- _____. 2021. "Sustainability and immaterial commons: rentier appropriation and intermediation in the artisanal fishing space of southern Chile". *Journal of Cultural Economy*, 14(2), 209-224.
- Marazzi, C. 2008. *Capital and language: From the new economy to the war economy*. Los Angeles; Cambridge: Semiotext(e).
- Marie-Vivien, D., Bérard, L., Boutonnet, J. P., y Casabianca, F. 2017. Are French geographical indications losing their soul? Analyzing recent developments in the governance of the link to the origin in France. *World Development*, 98, 25–34. DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.01.001
- Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Reardon, T., Timmer, C.P., y Berdegué, J. 2005. Supermarket Expansion in Latin America and Asia Implications for Food Marketing Systems.
- Rodríguez-Cohard, J. C., y Parras, M. 2011. The olive growing agri-industrial district of Jaén and the international olive oils cluster. *Open Geography Journal*, 4, 55–72.
- Rullani, E. 2004a. *Economia della conoscenza: creatività e valore nel capitalismo delle reti*, Roma, Carocci.
- _____. 2004b. *La fabbrica dell'immateriale. Produrre valore con la conoscenza*, Roma, Carocci.
- Sanz Cañada, J. y Macías Vázquez, A. 2005. Quality certification, institutions and innovation in local agro-food systems: Protected designations of origin of olive oil in Spain. *Journal of Rural Studies*, 21(4), 475–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.10.001>
- Teil, G. 2017. *Protecting appellations of origin: One hundred years of efforts and debates*. In W. van Caenegem & J. Cleary (eds.), *The importance of place: Geographical indications as a tool for local and regional development* (pp. 147–171). Springer International Publishing.
- Vercellone, C. 2008. "The new articulation of wages, rent and profit in cognitive capitalism". En *The Art of Rent*, Londres, Queen Mary University.
- Zambrana Pineda, J. F. 2006: El sector primario andaluz en el siglo XX. Sevilla: Instituto de Estadística de Andalucía. Gómez, S. 2000. "Organizaciones rurales en América Latina (marco para su análisis)". *Revista Austral de Ciencias Sociales* 4: 27–54.